

**PROGRAMA DE ACTUACIÓN QUE PRESENTADA DÑA. M^a
CAROLINA SERRANO GÓMEZ PARA OPTAR A LA PRESIDENCIA
DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE ASTURIAS.**

(Base Segunda. 2, Acuerdo de 15 de enero de 2025 del Pleno del CGPJ. BOE de 5 de febrero de 2025),

La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ) establece en su artículo 80 que Las Audiencias Provinciales, que tendrán su sede en la capital de la provincia, de la que tomarán su nombre, extenderán su jurisdicción a toda ella, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 82, y en el artículo 81 que se compondrán de un Presidente y de, al menos, dos magistrados. Corresponde al Presidente, entre otras funciones, adoptar las medidas necesarias para el funcionamiento de la Audiencia Provincial, resolver sobre la adecuada utilización del edificio y dependencias y ejercer los poderes de gobierno sobre el personal.

Este proyecto pretende ser una aproximación a la labor a desarrollar en el supuesto de ser elegida para el cargo.

I.- SITUACIÓN DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE ASTURIAS.

La Audiencia Provincial de Asturias está constituida por ocho secciones: tres penales (segunda, tercera y octava) y cinco civiles. Dos de estas secciones, la séptima y la octava están desplazadas a la localidad de Gijón. Por su parte, la provincia de Asturias está dividida en 18 partidos judiciales, de los cuales, la mitad, son unipersonales.

Todas las secciones de la Audiencia Provincial están compuestas por magistrados y magistradas con larga experiencia en el desarrollo de la labor jurisdiccional. Puntualmente, por motivo de traslado o comisión en servicios especiales de alguno de sus miembros, alguna de las secciones requiere de un refuerzo.

El tiempo de respuesta y resolución de los asuntos es adecuado si bien, la creciente litigación en masa hace que la presión que actualmente soportan los Juzgados de Primera Instancia acabe afectando a las secciones civiles de la Audiencia. Sería necesario prestar atención a los asuntos que por diferentes motivos se dilatan en su tramitación incidiendo en la necesidad de que el tiempo de respuesta sea breve.

Según los datos del CGPJ los módulos de entrada de asuntos son aceptables. Respecto de los órganos unipersonales de la Comunidad Autónoma, los Juzgados de Primera Instancia de Oviedo y Gijón y los de Primera Instancia e Instrucción de Avilés presentan un módulo de entrada excesivo y que muy probablemente continuará creciendo. Por lo que se refiere a la pendency de los asuntos, es satisfactoria, si bien, en las secciones civiles, es de prever que aumente dado que, a pesar de las sucesivas reformas legislativas, el número de asuntos no hace más que crecer.

II.- PROPUESTAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

A.- Entrada en vigor de la L.O. 1/2025.

La entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 tendrá importantes implicaciones para el funcionamiento de las Audiencias Provinciales en España. Esta ley tiene como objetivo modificar diversos aspectos del sistema judicial, en particular, en lo que respecta a la organización, distribución de competencias y funcionamiento de los tribunales, lo que afectará directamente a las Audiencias Provinciales.

La Ley Orgánica 1/2025 busca optimizar el sistema judicial. El artículo 1 modifica la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, en dos ámbitos fundamentales; por un lado, la creación de los Tribunales de Instancia y, por

otro, la creación y constitución de las Oficinas de Justicia en los municipios. El artículo 84 prevé la existencia de un Tribunal de Instancia en cada partido judicial que estará integrado por una Sección Única, de Civil y de Instrucción, o, en los supuestos previstos en la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, por una Sección Civil y otra Sección de Instrucción.

Además, la ley prevé que los Tribunales de Instancia puedan estar integrados por Secciones de Familia, Infancia y Capacidad, de lo Mercantil, de Violencia sobre la Mujer, de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, de lo Penal, de Menores, de Vigilancia Penitenciaria, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social. Incluso se establece la posibilidad de que en cualquiera de las Secciones de los Tribunales de Instancia se especialicen también algunas plazas para el conocimiento de determinadas clases de asuntos o las ejecuciones propias del orden jurisdiccional de que se trate.

Otras modificaciones que afectan a los órganos judiciales son las operadas en materia de competencias atribuidas por razón de la materia a determinados órganos, concretamente en el ámbito civil especializado en materia de familia, infancia y capacidad y en el ámbito penal especializado en materia de violencia contra la infancia y la adolescencia. A esto hay que añadir que se incluye la posibilidad de que la instrucción de un determinado proceso penal o el conocimiento en primera instancia de un procedimiento de cualquier orden jurisdiccional corresponda conjuntamente a tres jueces, juezas, magistrados o magistradas del Tribunal de Instancia.

En el ámbito de las Audiencias, el artículo 82 bis de la LOPJ contempla la posibilidad de que una o varias secciones asuman el conocimiento de las causas correspondientes a violencia sobre la mujer, violencia contra la infancia y la adolescencia, familia, infancia y capacidad y mercantil (2. *El*

Consejo General del Poder Judicial, oída la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, podrá acordar que una o varias secciones de la misma Audiencia Provincial asuman el conocimiento de los recursos que se interpongan contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los jueces, las juezas, los magistrados y las magistradas de las Secciones de Violencia sobre la Mujer, de las Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia y de las Secciones de Familia, Infancia y Capacidad de la provincia. 3. El Consejo General del Poder Judicial, oída la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, podrá acordar que una o varias secciones de la misma Audiencia Provincial asuman el conocimiento de los recursos que se interpongan contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los jueces, las juezas, los magistrados y las magistradas de las Secciones de lo Mercantil y de los recursos contra aquellas resoluciones que agoten la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas. El acuerdo de especialización deberá adoptarse necesariamente cuando el número de plazas de magistrados y magistradas de las Secciones de lo Mercantil existentes en la provincia fuera superior a cinco y podrá tener carácter excluyente del conocimiento de otros recursos atribuidos a la competencia de las secciones de la misma Audiencia Provincial. Si las secciones especializadas fueran más de una, el Consejo General del Poder Judicial deberá distribuir el conocimiento de los recursos entre ellas, en atención a las materias atribuidas a la competencia de las Secciones de lo Mercantil de los Tribunales de Instancia.) La tendencia cada vez más creciente a la especialización hace que sea conveniente utilizar esta posibilidad y atribuir a alguna o algunas secciones el conocimiento de estas materias. La reforma pretende, sin duda, una mayor especialización en determinadas materias lo que debe tener su reflejo en la Audiencia provincial, lo que requerirá que los

magistrados y magistradas tengan una mayor formación en esas áreas específicas para garantizar una justicia más eficaz y experta.

Aunque a fecha actual es imposible determinar la influencia que la Ley Orgánica 1/2025 va a tener en el número de asuntos que se someterán a la consideración de los Juzgados y Tribunales y, en concreto si novedades como el establecimiento de medidas de resolución extrajudicial de conflictos en la jurisdicción civil va a lograr el pretendido efecto de disminuir la carga de trabajo, lo cierto es que la nueva regulación, podría implicar un aumento en la carga de trabajo de las Audiencias Provinciales, especialmente si se incrementa el número de recursos que estas deben gestionar. Esto podría generar una sobrecarga en el sistema judicial, lo que podría impactar en los plazos de resolución de los casos y en la eficiencia del sistema en general.

Si bien la reforma tiene como objetivo mejorar la eficiencia y la transparencia del sistema judicial, es probable que su implementación inicial implique un período de ajuste. Las Audiencias Provinciales tendrán que adaptarse a nuevos procedimientos y criterios que podrían afectar temporalmente los plazos de resolución. Por ejemplo, en la jurisdicción civil se establece como requisito de procedibilidad la necesidad de acudir a los denominados MASC. La dicción de la reforma hace que se planteen numerosas dudas sobre la forma de llevar a efecto esta previsión legal, lo que, sin duda, hará necesario fijar, en sede de Audiencia, los criterios interpretativos necesarios.

La Ley Orgánica 1/2025 también busca mejorar la transparencia y el acceso a la información judicial, lo que afectará directamente a las Audiencias Provinciales. Se espera que se implementen mecanismos más efectivos de comunicación con la sociedad, lo que permitirá a los ciudadanos conocer

mejor los procedimientos y las decisiones judiciales. Esto podría mejorar la percepción pública sobre la imparcialidad y la equidad del sistema judicial.

La ley también puede traer consigo una serie de desafíos administrativos, como la necesidad de modernizar infraestructuras tecnológicas, mejorar la gestión de los recursos humanos y aumentar la formación del personal judicial. Las Audiencias Provinciales tendrán que enfrentarse a estos retos, lo que podría requerir un periodo de adaptación para asegurar que el sistema funcione de manera fluida.

En definitiva, la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 tendrá un impacto significativo en toda la organización judicial y, por tanto, en las Audiencias Provinciales, lo que requerirá un proceso de transición y ajuste para garantizar que los objetivos de la reforma se cumplan de manera efectiva.

B.- Unificación de criterios.

En cualquier sistema judicial, la coherencia y la uniformidad en la interpretación y aplicación de la ley son fundamentales para garantizar la justicia y la equidad. Uno de los principales desafíos que enfrentan los tribunales es la disparidad en los criterios adoptados por diferentes jueces y tribunales al abordar casos similares. Esta falta de uniformidad puede generar inseguridad jurídica. Es por ello que la unificación de criterios judiciales se presenta como una necesidad imperiosa para el buen funcionamiento del sistema judicial.

La unificación de criterios es el proceso mediante el cual los tribunales, especialmente las instancias superiores, establecen directrices claras y consistentes sobre la interpretación de la ley en situaciones recurrentes. Esto

implica que las decisiones judiciales sigan una línea coherente que permita que los ciudadanos y los profesionales del derecho sepan, con certeza, cuál es la postura que se adoptará ante casos similares. La falta de unificación puede llevar a que, en circunstancias análogas, se dicten resoluciones diferentes, lo que crea incertidumbre y dificulta el acceso a la justicia.

Además, la unificación de criterios contribuye a una mayor certeza jurídica, lo que es esencial para el adecuado funcionamiento de la sociedad. Esto facilita la toma de decisiones informadas por parte de los diferentes operadores jurídicos, ya que se sabe que las normas se aplicarán de manera consistente en todo el territorio y en casos similares.

Otro beneficio clave de la unificación de criterios es la eficiencia del sistema judicial. Al establecer principios claros y uniformes, se reduce la cantidad de litigios innecesarios que surgen cuando las personas buscan obtener interpretaciones contradictorias o alternativas de la ley. Además, la carga de trabajo de los tribunales puede disminuir, ya que los jueces no tendrían que decidir casos similares de manera aislada, sino que podrían basarse en precedentes consolidados que ya establecen el camino a seguir.

Es cierto que la unificación de criterios no significa que los tribunales deban adoptar una postura rígida y sin posibilidad de revisión. El derecho está en constante evolución, y los tribunales deben ser capaces de adaptarse a los cambios sociales, tecnológicos y económicos. Sin embargo, esto no debe impedir que se busque una base común de interpretación que garantice la estabilidad y previsibilidad del sistema judicial. La jurisprudencia de las instancias superiores debe servir como guía para los tribunales inferiores, permitiendo que se mantenga la coherencia y evitando que se tomen decisiones contradictorias que confundan a la sociedad.

El apartado 4 del artículo 264 de la L.O. 1/2025 prevé la posibilidad de que la Junta de Jueces y Juezas de Sección del Tribunal de Instancia se reúna para el examen y valoración de criterios cuando los jueces, las juezas, los magistrados y las magistradas que la integren sostuvieren en sus resoluciones diversidad de criterios interpretativos en la aplicación de la ley en asuntos sustancialmente iguales. La ley considera deseable alcanzar una unidad de criterio en asuntos importantes lo que debe tener su reflejo en el funcionamiento de las Audiencias y ello sin mermar la independencia de los Jueces y Tribunales sometidos únicamente al imperio de la Ley. En igual sentido, el artículo 57 del Reglamento 1/2000 encomienda a los Presidentes de la Audiencia la unificación de criterios y la coordinación de prácticas procesales.

En conclusión, es deseable recurrir a este mecanismo sobre todo en el caso de litigación en masa y cuando se introducen reformas jurídicas de calado- como en el momento actual-que pueden dar lugar a criterios dispares en situación análogas.

C.- Sedes judiciales.

Uno de los problemas más acuciantes a los que se enfrenta la Justicia en el ámbito del Principado de Asturias es la carencia de edificios que reúnan las condiciones idóneas para una adecuada prestación del servicio. Esto ha sido puesto de relieve en las sucesivas memorias elaboradas por el Tribunal Superior de Justicia. Si bien la administración prestacional ha llevado a cabo una notable inversión en dotación inmobiliaria, lo cierto es que, según los estudios llevados a cabo, muchos de los edificios no cumplen con las mínimas condiciones para el desarrollo de la actividad jurisdiccional. A ello

se une, en el caso de Oviedo, sede la Audiencia Provincial, el grave problema de la dispersión de órganos judiciales (hasta ocho sedes). La entrada en funcionamiento de los Tribunales de Instancia hace necesario o al menos deseable, que todos los magistrados y magistradas tengan sus oficinas en un único edificio. Con ello se logrará una mayor eficiencia en la prestación del servicio y se evitarán los problemas actuales para los justiciables y para el resto de operadores jurídicos. Pues bien, todas las propuestas que se barajan para intentar solucionar este problema pasan por el traslado de la sede de la Audiencia Provincial a un nuevo edificio con el fin de que su actual emplazamiento sea ocupado por los Juzgados dispersos por la ciudad. El inmueble al que, en su caso, se traslade la Audiencia Provincial habrá de reunir las condiciones y comodidades necesarias y debe poder adaptarse a futuras necesidades. La experiencia muestra que las necesidades de espacio siempre son crecientes y que, junto con la estricta labor jurisdiccional es necesarios prestar al ciudadano otra serie de servicios (oficinas de asesoramiento, salas Gesell, etc) que demandan más espacio físico. Sería conveniente que, en su caso, la nueva sede de la Audiencia Provincial estuviese dotada de espacio suficiente para albergar oficinas de atención al público, sala para la reunión del jurado, etc.

D.- Justicia digital.

El desempeño de la labor jurisdiccional ha experimentado grandes cambios en los últimos veinte años derivados de la implantación, en todos los ámbitos de la Justicia, de medios informáticos y tecnológicos. De la utilización exclusiva de papel, se ha pasado, en tan breve lapso de tiempo, al expediente digital y la ausencia prácticamente total de papel. Ello ha supuesto para los

Jueces y Juezas un notable esfuerzo de adaptación que no siempre ha sido justamente valorado.

En el Principado de Asturias, la tramitación de expedientes judiciales se hace de forma digital, mediante la utilización principalmente, de tres aplicaciones: el Visor Horus (a través del cual es posible examinar los autos), el portafirmas (que, como su propio nombre indica, permite la firma electrónica de resoluciones) y el sistema Minerva (con el que se lleva a cabo la tramitación de los procedimientos). A estas aplicaciones hay que añadir otras muchas, como Arconte (para grabación de las vistas),

El funcionamiento de estos sistemas ha sido en no pocas ocasiones, deficiente, generando retrasos injustificados y malestar tanto en los miembros de la carrera judicial como en el resto de los operadores jurídicos. Las sucesivas Memorias ponen de relieve esta cuestión. Justo es decir, que la administración prestacional ha hecho un gran esfuerzo para mejorar la situación, pero esta dista mucho de cumplir los requisitos de eficiencia que persiguen todas las reformas jurídicas de los últimos años.

Como miembro de la Sala de Gobierno he tenido ocasión de formar parte y participar en las reuniones de la Comisión de Informática constituida por la Administración del Principado de Asturias y miembros de la Sala de Gobierno. Esta comisión examina las deficiencias que se observan en el funcionamiento de los sistemas informáticos y propone mejoras tanto de estos sistemas como de los medios tecnológicos con los que cuenta la Administración de Justicia. Sería deseable que estas reuniones mantuvieran su frecuencia a lo largo del tiempo y que en ellas pudieran participar miembros de los distintos juzgados y tribunales.

Por otra parte, la entrada en vigor de la LO 1/2025 y de los Tribunales de Instancia parte de la base de la tramitación electrónica correcta de todos los expedientes lo que haga aún más necesario que el Juez tenga a su disposición herramientas informáticas y medios tecnológicos adecuados.

Pero ninguna mejora tecnológica o informática surtirá el efecto previsto si no va acompañada de la correspondiente formación de los integrantes de la carrera judicial. Esta formación ha de ser continua y adaptada a las circunstancias de quien la recibe. Como Presidenta intentaría que la formación cumpliera con estos estándares y que fuera posible contar con asesoramiento técnico continuo.

E.- Relaciones con los órganos unipersonales.

Una de las formas de alcanzar la unidad de criterios es, sin duda, mantener una relación cercana y continua con los juzgados unipersonales y, en el futuro próximo, con los integrantes de los Tribunales de Instancia. En alguna ocasión y con cargo al programa de formación descentralizada, se han llevado a cabo reuniones entre Magistrados y Magistradas de la Audiencia Provincial y Magistrados y Magistradas, Jueces y Juezas de órganos unipersonales. Estas jornadas permiten conocer de primera mano los criterios seguidos por la Audiencia Provincial y la interpretación que en ella se hace de las normas, así como el intercambio de opiniones sobre cuestiones dudosas. Los participantes en este tipo de reuniones las han valorado muy positivamente. Sería deseable que estas jornadas se celebrasen regularmente y que llegasen a un mayor número de compañeros, utilizando, si fuera necesario, medios tecnológicos. Los denominados “webinar” serían una forma práctica y menos costosa de celebrar estas reuniones.

F.- Comunicación y transparencia.

La comunicación y la transparencia son pilares fundamentales para el funcionamiento adecuado de cualquier sistema democrático, y en particular, del sistema judicial. Los juzgados, como instituciones encargadas de impartir justicia, deben garantizar que sus decisiones no solo sean justas y legales, sino también comprensibles y accesibles para la sociedad que las recibe. Esta necesidad de transparencia no es solo un requisito moral o ético, sino también una garantía para la confianza pública en el Estado de derecho.

Uno de los principales problemas que enfrenta la justicia hoy en día es la percepción de que los procesos judiciales son opacos, lejanos y a menudo incomprensibles para la ciudadanía. Esto crea un vacío de confianza que, a su vez, alimenta la desconfianza en el sistema judicial. Las personas pueden sentir que el acceso a la justicia está limitado o que las decisiones judiciales carecen de justificación clara, lo que puede llevar a la deslegitimación del poder judicial. La falta de comunicación efectiva entre los juzgados y la sociedad contribuye a este problema, ya que los ciudadanos no siempre tienen acceso a la información relevante sobre los casos, los plazos procesales, ni sobre los criterios que guían las decisiones judiciales.

La transparencia en la justicia implica que los procesos judiciales sean visibles para la sociedad y que las decisiones estén debidamente motivadas y accesibles. Cuando un juzgado toma una decisión, esta debe ser explicada de manera clara, no solo para las partes involucradas, sino también para el público en general, de forma que se comprenda el razonamiento detrás de dicha decisión. Esto no significa que todos los detalles de un caso puedan ser divulgados, especialmente en aquellos que involucran datos sensibles, pero

sí implica una narrativa que permita a los ciudadanos entender cómo se llegó a una determinada conclusión.

Por otro lado, la comunicación efectiva entre los juzgados y la sociedad también debe abarcar un aspecto proactivo. Es decir, no solo se trata de proporcionar información a demanda, sino de establecer canales claros, accesibles y efectivos para que los ciudadanos puedan informarse, hacer preguntas y, en caso necesario, expresar sus preocupaciones. En muchos países, las reformas en la administración de justicia han incluido la creación de páginas web institucionales, ruedas de prensa, y sistemas de consulta en línea, los cuales facilitan el acceso a la información judicial y permiten que los ciudadanos sigan los procesos de manera más cercana.

Una justicia transparente y comunicativa no solo beneficia a los individuos involucrados en un juicio, sino a toda la sociedad. Al garantizar que las decisiones judiciales son entendidas y aceptadas por el público, se refuerza la legitimidad del sistema judicial y se promueve el respeto por el Estado de derecho. Además, cuando la sociedad tiene acceso a información clara sobre cómo y por qué se toman las decisiones, es más probable que confíe en que la justicia está siendo impartida de manera equitativa, sin favoritismos o sesgos.

Por otra parte, es necesario que las resoluciones judiciales sean comprensibles por sus destinatarios finales. La LO 1/2025 establece la necesidad de que las decisiones judiciales sean redactadas en términos claros. Es evidente que no siempre es posible cumplir con esta exigencia sobre todo cuando se trata de cuestiones jurídicamente complejas. En el caso de la Audiencia, por su propia naturaleza, sus decisiones son más técnicas. Pero, en la medida de lo posible debe procurarse que el ciudadano pueda ser

consciente de las consecuencias que para sus intereses tiene una resolución judicial.

Esta necesidad de claridad es aún más ineludible en el caso de personas con algún tipo de discapacidad. La Administración de Justicia en nuestra Comunidad autónoma ha sido pionera el programa de lectura fácil de sentencias, iniciativa que ha obtenido premios a nivel nacional. Debe potenciarse, en colaboración con la administración prestacional y con las asociaciones del apoyo a personas con discapacidad, este sistema que permite que cualquier destinatario de una resolución judicial, con independencia de sus capacidades, pueda comprender su contenido.

En conclusión, la necesidad de comunicación y transparencia entre los juzgados y la sociedad es indispensable para fortalecer la confianza pública en el sistema judicial. Solo mediante un enfoque claro, accesible y proactivo de comunicación, los ciudadanos podrán comprender y sentir que la justicia se aplica de manera efectiva y justa. Esto no solo contribuye a la estabilidad social, sino que también fomenta una cultura de respeto por las instituciones democráticas y el Estado de derecho.

G.- Colaboración con otras instituciones.

Como resulta claro y evidente, la Administración de Justicia es un servicio público que debe estar en contacto con la sociedad a la que va dirigida. Para ello es necesario establecer “puntos de encuentro”. En este ámbito mis propuestas serían las siguientes:

- Colaborar con la Universidad de Oviedo y en concreto con su Facultad de Derecho a fin de que los alumnos que cursen sus estudios en la misma puedan conocer de primera mano el funcionamiento de la

Audiencia Provincial. Todas las carreras universitarias tienen un componente práctico que cada vez es más potenciado. En el caso del Grado de Derecho visitar las diferentes secciones de la Audiencia Provincial y tener la ocasión de presenciar vistas, sería de gran interés para asignaturas como Derecho Penal, Derecho Civil, Derecho Mercantil y Derecho Procesal. Con ello, además, se acercaría la Justicia a los futuros operadores jurídicos.

- Participar en programas como “Educando en Justicia” que permiten acercar a los jóvenes el funcionamiento de la Justicia y formar en valores que les sirvan para su desarrollo personal.
- Participar en programas que forme también a las nuevas generaciones en valores tan importantes como la igualdad de género con la finalidad de que adquieran valores tendentes a erradicar la lacra social de la violencia doméstica y de género.
- Colaborar con los Colegios Profesionales de Abogados y Procuradores celebrando curso, jornadas y reuniones que permitan el intercambio de opiniones y el estudio de cuestiones de relevancia jurídica.

En Oviedo a 23 de febrero de 2025.